INEFICACIA EN LA GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Y DE INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO EN GUANTÁNAMO

María Lucía Pereiro Maya¹

Fecha de recepción: 15 de septiembre de 2023.

Fecha de aceptación: 18 de octubre de 2023.

Referencia: Pereiro, M. (2024). Ineficacia en la garantía de derechos humanos y de intervención internacional en el centro penitenciario en Guantánamo. *Revista Científica Codex*, 9(17), 145-168.

RESUMEN

El presente artículo analiza la ineficiencia de los mecanismos e instrumentos jurídicos del sistema normativo interamericano en la protección de los derechos humanos en el centro penitenciario en Guantánamo (Cuba). Este análisis se llevará a cabo a través de la observación del marco teórico y político que dio lugar a la creación del centro penitenciario en Guantánamo, así como el contexto normativo y de derechos humanos en la base naval. Atendiendo en todo caso a un paradigma cualitativo, con un enfoque histórico hermenéutico y la aplicación de técnicas de revisión bibliográfica. Estas metodologías permitirán reflejar de manera concreta los problemas

1 Abogada de profesión, especialista en derechos humanos, en calidad de becaria, especialista en derecho penal de la Universidad de Nariño. María Lucía es reconocida por su destacada trayectoria en el sector de los servicios públicos. Originaria de Ipiales, Nariño, ha dedicado más de 2 años a EMPOOBANDO E.S.P., la empresa encargada de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ipiales. Actualmente, como contratista en la dependencia del Plan Departamental de Agua, adscrita a la Secretaría de Planeación del Departamento de Nariño, comprometida en la garantía de los derechos humanos en el marco de los servicios públicos domiciliarios de la comunidad.

graves de derechos humanos que enfrentan los detenidos, tales como la falta de garantías judiciales, protección judicial, integridad personal, libertad y dignidad humana, bajo el régimen de justicia impuesto por los agentes estadounidenses en Guantánamo. El objetivo final es evidenciar que el sistema interamericano y sus distintos instrumentos de intervención en materia de derechos humanos son aún incipientes y de limitada eficacia frente al discurso de soberanía y diplomacia que sostiene Estados Unidos, así como a la protección de derechos humanos en el centro penitenciario.

Palabras clave: Guantánamo, derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terrorismo, diplomacia.

ABSTRACT

This article analyzes the inefficiency of the legal mechanisms and instruments of the inter-American regulatory system in the protection of human rights in the penitentiary center in Guantánamo (Cuba). This analysis will be carried out through the observation of the theoretical and political framework that gave rise to the creation of the penitentiary center in Guantánamo, as well as the regulatory and human rights context at the naval base. In any case, taking into account a qualitative paradigm, with a historical hermeneutic approach and the application of bibliographic review techniques. These methodologies will allow us to concretely reflect the serious human rights problems faced by detainees, such as the lack of judicial guarantees, judicial protection, personal integrity, freedom and human dignity, under the justice regime imposed by US agents in Guantánamo. The final objective is to show that the inter-American system and its different instruments of intervention in matters of human rights are still incipient and limited in effectiveness in the face of the discourse of sovereignty and diplomacy that the United States supports, as well as the protection of human rights in the penitentiary center.

Keywords: Guantánamo; human rights; Inter-American Commission on Human Rights; terrorism; diplomacy.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centró en la ineficacia de los mecanismos y tratados internacionales en la protección de los derechos humanos de

los detenidos extranjeros en la prisión de Guantánamo (Cuba). Enfocó específicamente las violaciones graves como detenciones indefinidas, juicios sin el debido proceso, tratos crueles, inhumanos y degradantes, discriminaciones por razones de raza, etnia y afectaciones a la integridad personal y libertad que se realizaron por agentes estadounidenses de manera arbitraria e ilícita durante su arresto y permanencia en el centro.

Este problema ha emergido debido a la inoperancia y desestimación de los mecanismos internacionales establecidos por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no han logrado el cumplimiento de las garantías y el respeto de los derechos en este contexto. Esta situación se ha visto agravada por la postura de Estados Unidos, que, amparado en el principio de soberanía y seguridad nacional, ha minimizado o ignorado la relevancia de estos asuntos internacionales.

Para abordar esta problemática, la investigación exploró las causas que llevaron a Estados Unidos a tomar posesión de Guantánamo, el contexto social y el entorno político y jurídico que se desarrolló tras los eventos del 11 de septiembre de 2001, y se realizó una descripción detallada de las actuaciones y comportamientos que evidencian la amenaza a los derechos humanos.

1. CONTEXTO HISTÓRICO DE CREACIÓN E INSTITUCIÓN DEL CENTRO DE RECLUSIÓN GUANTÁNAMO (CUBA)

1.1 Ataque terrorista: 11 de septiembre de 2001

La base naval se encuentra a unos 30 kilómetros de Guantánamo con un área de 120 km² y se conoce como “Base Naval de la Bahía de Guantánamo” de los Estados Unidos; caracterizándose en el mundo latinoamericano y ante la comunidad internacional como uno de los centros que presenta flagrantes vulneraciones de derechos humanos y garantías mínimas fundamentales frente a los detenidos extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) expresó al respecto:

779 personas están o han estado detenidas en la base naval estadounidense en Guantánamo, todos ellos hombres, extranjeros y musulmanes (régimen discriminatorio por razón de nacionalidad, étnica y religión): de los cuales el 93% no fueron capturados por EEUU, la mayoría fueron vendidos a EEUU por una recompensa; 8 detenidos condenados por comisiones

militares (violación al derecho al ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial); 22 niños y adolescentes fueron detenidos; 104 realizaron una huelga de hambre; 23 detenidos trataron de cometer suicidio y 116 hombres extranjeros musulmanes siguen detenidos (considerada la detención indefinida de personas como violación flagrantes del derechos internacional de los derechos humanos y una forma de trato cruel, inhumano y degradante) (p.1).

Se trata de una de las primeras bases navales -y la más antigua-instituida por Estados Unidos en Cuba, tras un proceso de apropiación por la decisión de transferir porciones territoriales resultado de la guerra de independencia.

El origen de la base de Guantánamo se remonta al tratado de paz entre Estados Unidos y España suscrito en París el 10 de diciembre de 1898, en el que se señaló:

España renunciaba a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba y reconocía el derecho a que fuera ocupada por los Estados Unidos, que se comprometían a asumir y cumplir «las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho internacional, para la protección de vidas y haciendas», mientras durara la ocupación (Castillo, 2014, p. 1).

Otro de los orígenes de la base, tiene que ver con lo que se conoce como Enmienda Platt, presentada ante el Senado en 1902, en virtud de la cual se buscaba regular las relaciones entre el nuevo Estado independiente cubano y Estados Unidos.

De ahí que, en la Constitución de Cuba de 1901, en su apéndice se estipuló la idea de que los Estados Unidos intervinieran en la isla. En efecto, el gobierno de Cuba se comprometió, como lo señala Castillo (2014), “a vender o a arrendar a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos” (p. 1).

Con posterioridad, en el año 1902, con la independencia de Cuba, los presidentes de este país y Estados Unidos suscribieron el acuerdo *for the Lease of Lands for Coaling and Naval Stations*. En él se mantuvo la idea de arrendamiento para asuntos carboneros y navales. Tratado que fue complementado con el acuerdo del 2 de julio de 1903 “por el que Estados

Unidos se comprometía a pagar a Cuba una suma anual de dos mil dólares, en monedas de oro de los Estados Unidos, durante el tiempo que durara la ocupación y el uso de las tierras” (Castillo, 2014, p. 1). Este acuerdo fue reafirmado en vigencias posteriores con la suscripción de otros tratados.

Circunstancia precedida que cambió con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, donde se inició a considerar la ocupación de Estados Unidos como arbitraria e ilegal, contemplando que los tratados fueron suscritos a través del ejercicio de la violencia y la coerción. Pese a ello, el país norteamericano mantuvo, y mantiene hasta el día de hoy, la ocupación de la base naval de Guantánamo.

Con posterioridad, el 11 de septiembre de 2001, ocurrió el atentado terrorista en Estados Unidos que ocasionó un revuelo en el mundo jurídico y de derechos humanos, sobre todo en lo que refiere al tratamiento en la base naval contemplada en Guantánamo. Así se evidenció:

Cuyo inicio se concretó el 7 de octubre de 2001 con los primeros ataques aéreos sobre Afganistán y más tarde con la intervención de tropas terrestres en territorio afgano, operaciones en las cuales detuvieron hombres, algunos de los cuales fueron enviados a la Base de Guantánamo. Sin proceso judicial, sin identidad, sin acceso a ellos, sin información alguna sobre la realidad de su vinculación con actos ilícitos, sin comunicación, sin individualizar la situación de cada uno de ellos, no se les reconoció el estatus de prisioneros de guerra, sino que fueron llamados combatientes enemigos, con lo cual Estados Unidos afianzaba el cierre al acceso de un mínimo aceptable de respeto a sus derechos (Sampedro, 2005, pp. 1-2).

En adelante, se evidenciaron las primeras vulneraciones de derechos humanos a prisioneros situados en la sede de Guantánamo: secuestros ilegales, detenciones indefinidas sin debido proceso, sin juicio justo, torturas y tratos crueles, degradantes e inhumanos de conformidad con informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en especial la Resolución Terrorismo y Derechos Humanos, expedida el 12 de diciembre de 2001.

Como resultado, este espacio comenzó a considerarse como una zona de no derecho debido a que, durante años, Estados Unidos ha justificado sus violaciones y actos ilícitos cometidos en este centro alegando que se trata de “combatientes enemigos”. En este contexto, se les ha negado el derecho

fundamental a ser escuchados en un juicio ante un tribunal competente, con normas preexistentes; circunstancia que, al ser vulneradora del derecho internacional, ha conllevado la intervención de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Estados Unidos sostiene argumentos con el fin de validar su actuación en el Centro. En primer lugar, desconoce la calidad de prisioneros de guerra a los prisioneros de Guantánamo, aun cuando su situación jurídica así lo avala, por no encontrarse cobijados por los Convenios de Ginebra, según su criterio. Al respecto se manifestó:

La postura de Estados Unidos sobre el tema se fundamenta en que dichas personas no encuadran en el estatus mencionado porque no cumplen los requisitos que debe reunirse para ser considerados prisioneros de guerra según el artículo 4 del convenio III de Ginebra tales como: (...) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas deben (...) a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; c) llevar las armas a la vista; d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra (Gutiérrez, De Cristofaro y Woods, 2011, como se citó en Madrid, 2020, p. 32).

Posición que encuentra controversia, ya que conservar o no el estatus, no impide la protección de los derechos de los prisioneros en Guantánamo. En otras palabras, el alcance y la aplicación de los derechos se extiende a todas las personas que se encuentren detenidas, independientemente de su estatus.

Otro de los argumentos del Estado norteamericano tiene que ver con la idea de una política que termine con el terrorismo internacional para justificarse de sus propios actos violatorios, es decir, plantea el origen de la base naval a partir del presupuesto de soberanía, defensa y seguridad nacional para vulnerar garantías humanas.

En definitiva, la Base Naval de Guantánamo es un símbolo complejo de conflicto entre seguridad nacional y derechos humanos. Aunque su ocupación se basa en acuerdos históricos, su uso actual ha suscitado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. Las prácticas en Guantánamo, como las detenciones

indefinidas y la tortura, han sido ampliamente condenadas por organismos internacionales, lo que pone en evidencia una brecha significativa entre las políticas estadounidenses y los estándares internacionales de derechos humanos.

La controversia en torno a Guantánamo refleja un conflicto más amplio sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales, y plantea interrogantes sobre la legitimidad y el impacto de las políticas de detención en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

2. CONTEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN DE DERECHOS HUMANOS QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO PENITENCIARIO EN GUANTÁNAMO (CUBA)

2.1. Derecho internacional en el marco de los derechos humanos

2.1.1. Derecho a la libertad personal

En relación con la vulneración de derechos humanos en la base naval de Guantánamo, de conformidad a los diversos monitoreos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tiene que, una de las violaciones más graves que se generó en el Centro está relacionada con la libertad personal consecuencia de las detenciones indefinidas a la que eran sometidos los procesados; violación que reviste relevancia normativa ya que, además de contravenir el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos acerca de garantías judiciales y protección judicial, respectivamente, afecta de manera significativa la libertad del ser humano que es considerada uno de los derechos innatos y fundamentales con los que nace una persona, y el arrebatársela, representa una de las amenazas más graves en el marco de protección que debe ofrecer un Estado.

Dentro de la normatividad internacional se tienen los artículos I y XXV de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que preceptúan el derecho de todo ser humano a la vida, libertad y seguridad de una persona, aunado a la prohibición de su privación sin que medie el cumplimiento de las leyes preexistentes.

Norma que fue confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) en los siguientes términos:

Entre las numerosas garantías encaminadas a la protección de las personas contra la interferencia ilegítima o arbitraria de su libertad por parte del Estado se encuentran los requisitos de que toda privación de la libertad se realice de acuerdo con una ley preestablecida, que el detenido sea informado de las razones de su detención y notificado sin demora de las acusaciones que se le imputan; que toda persona privada de su libertad tiene derecho a un recurso jurídico, a obtener, sin demora, una determinación de la legalidad de su detención; y que la persona sea juzgada dentro de un plazo razonable o liberada mientras continúa el proceso (p. 41).

Si bien es cierto que en específicos espacios se pueden realizar detenciones más allá de un plazo razonable, siempre y cuando se justifique el motivo y el procedimiento que lo rige conforme al derecho a la guerra, también lo es que Estados Unidos avaló múltiples arbitrariedades, amenazando el debido proceso y la libertad de los detenidos, bajo la justificación de protección y salvaguarda de su soberanía; evidencia de ello es la omisión de juicios y procesos en contra de los detenidos durante y después del conflicto suscitado el 11 de septiembre del 2001.

Diversos actores internacionales han señalado en torno a las detenciones arbitrarias lo siguiente:

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha condenado el tratamiento de los detenidos en Guantánamo, observando que la detención indefinida constituye per se una violación a la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Adicionalmente, un informe de 2006 adoptado por el Consejo Económico y Social de la ONU sobre la situación de los detenidos en la Bahía de Guantánamo, y que lamentablemente sigue siendo relevante, señala que “el objetivo principal de la detención continuada no es evitar que los combatientes reanuden la lucha armada contra los Estados Unidos, sino obtener información y recabar datos para los servicios de inteligencia sobre la red Al Qaida” (p.50).

Aunque la justificación de las detenciones por parte de Estados Unidos era prevenir futuros actos terroristas en contra de los estadounidenses, se han impetrado diversas detenciones sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Esto incluye la

falta de acceso a recursos jurídicos y la ausencia de una motivación legal adecuada para las detenciones. Causa que, para autores como Blandón y Molina (2015), constituyen lo que se conocería en adelante como doctrina del mal menor:

En la teoría del mal menor, la violencia es indispensable para combatir el terrorismo. Esta tiene esa trascendencia por el hecho de que un órgano protector (el Estado) tiene la responsabilidad intrínseca de respaldar a todas las víctimas del terrorismo (...) la idea subyacente sugiere que la imposición de la violencia estatal es la forma más eficaz de combatir el terrorismo. Como valor agregado, la columna vertebral de la teoría es el desconocimiento de la ley y el Estado de derecho, es decir, el mal que se ejecuta para evitar otro mal de mayor trascendencia es más efectivo, pues se mide a través de las consecuencias que puede evitar (p. 166).

En definitiva, las detenciones en Guantánamo justificadas en nombre de la soberanía nacional por parte de los estadounidenses han suscitado un debate profundo sobre la legitimidad y la legalidad de las acciones estatales en contextos de guerra. A pesar de los argumentos de seguridad, la falta de procesos legales adecuados y las violaciones a los derechos humanos han sido ampliamente documentadas y criticadas por organismos internacionales. La teoría del mal menor, aunque intenta justificar la violencia estatal como un medio para prevenir mayores males, subraya la necesidad de balancear medidas de seguridad con el respeto a los principios fundamentales del derecho y la justicia. La cuestión fundamental sigue siendo cómo garantizar la seguridad nacional sin sacrificar los derechos y libertades individuales, y cómo asegurar que las acciones del Estado estén en conformidad con el marco legal aceptado internacionalmente.

2.1.2. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Otra de las prácticas vinculadas a la base naval de Guantánamo es la ejecución de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia los detenidos que se realizan de manera ilegal o sin la debida autorización del contenido normativo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) documentó y detalló estas técnicas empleadas por los funcionarios estadounidenses en Guantánamo, evidenciando su carácter violatorio de los derechos humanos:

Entre las diez técnicas descritas se encuentran: el confinamiento estrecho ("la colocación del individuo en un espacio confinado [generalmente oscuro], cuya dimensión restrinja la libertad de movimiento"); la parada de pared ("los brazos de la persona se estiran hacia el frente, con sus brazos reposando sobre la pared. Sus brazos soportan todo el peso del cuerpo. No se permite al individuo moverse o reposicionar sus manos o pies"); las posiciones de estrés ("diseñadas para producir molestias físicas asociadas con la fatiga muscular"); la privación del sueño, y el ahogamiento simulado.

Adicionalmente, se alega que otras prácticas de interrogatorio, como la privación sensorial, golpizas severas, choques eléctricos e hipotermia inducida, habrían sido autorizadas por el Director de la CIA durante la "guerra contra el terror". Muchas de las técnicas utilizadas por la CIA contra sospechosos de Al-Qaeda están basadas en el programa militar "Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape" (Survival, Evasion, Resistance and Escape, "SERE" por sus siglas en inglés), un programa de entrenamiento que era utilizado para entrenar a soldados estadounidenses durante la Guerra Fría para soportar tortura durante interrogatorios. (p. 54)

Entre otras disposiciones, el artículo 1 de la Declaración Americana, en concordancia con el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subraya la importancia fundamental de la dignidad humana en el marco de los derechos. Estos textos normativos establecen que la protección de la dignidad humana es esencial para la salvaguarda de diversas garantías humanas. De allí que, todas las actuaciones adelantadas por los Estados deben estar orientadas a garantizar y respetar este derecho fundamental.

Particularmente en Guantánamo, Cuba, se han puesto en grave riesgo las garantías de derechos fundamentales, lo que supondría afectar severamente el núcleo de la dignidad humana; evidencia de estos actos atroces se ha documentado en informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se describe el siguiente testimonio:

Según el Dr. Stephen Xenakis, Brigadier General (Retirado), perito médico y psiquiatra en varios casos relacionados con detenidos en Guantánamo, con frecuencia estos prisioneros no tienen expectativa de ser liberados, se encuentran traumatizados, sus vidas han sido perturbadas, y es muy

común que tengan problemas de sueño, ataques de ansiedad y una serie de dolencias físicas atribuibles al envejecimiento. Los detenidos que hoy están en la década de los 50, 60 y 70 años estarían desarrollando enfermedades crónicas que surgen en esta etapa de la vida. Al respecto, el Dr. Xenakis testificó ante el Comité Judicial del Senado que “la población que está envejeciendo en Guantánamo es vulnerable a desarrollar trastornos neuropsiquiátricos debilitantes derivados del trauma y el estrés, así como a sufrir demencia, depresión grave e inestabilidad emocional creciente” (p.63).

Finalmente, las prácticas de tortura y trato cruel en Guantánamo, como se detalla en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los testimonios del Dr. Stephen Xenakis, evidencian una violación sistemática de los derechos humanos. Las técnicas de interrogatorio empleadas no solo contravienen las normativas internacionales, sino que también provocan daños duraderos en la salud física y mental de los detenidos. El testimonio del Dr. Xenakis subraya el impacto devastador de estas prácticas en la salud y el bienestar de los prisioneros, muchos de los cuales sufren de trastornos neuropsiquiátricos y enfermedades crónicas.

El respeto a la dignidad humana, como lo enfatizan la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que todos los Estados actúen dentro de los límites legales y éticos. La documentación de estos abusos en Guantánamo pone de relieve la urgente necesidad de reformar las políticas y prácticas de detención y garantizar que los derechos fundamentales sean respetados y protegidos por parte de los Estados. Las violaciones a estos principios no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino que también socavan la integridad del sistema de derechos humanos en su conjunto.

2.1.3. Acceso a instancias judiciales (debido proceso)

El derecho a la protección judicial está establecido tácitamente en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, definiéndose en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Esto implica que, además de otorgar recursos sencillos y rápidos, los Estados deben velar porque estos resulten idóneos y efectivos para la salvaguarda de los derechos que se persigue o se entienden amenazados. En consecuencia, debe activarse una actuación de tal modo que, respete el debido proceso y ampare a todas las personas en cuanto a los derechos que a ellas se les confirió en cartas e instrumentos internacionales, suscritos previamente por los Estados.

Concretamente, Estados Unidos incumple su obligación de respetar y garantizar la protección judicial ya que, al momento de su detención, a los individuos no les son otorgados los recursos mínimos necesarios para acceder ante la justicia competente ni para ejercer una defensa equitativa y justa. No es válido afirmar que, en cumplimiento de procedimientos legales, se vulneren otras prerrogativas humanas. Derechos fundamentales como la protección judicial, garantías judiciales y la integridad personal no pueden verse comprometidos por la existencia de un conflicto internacional; incluso en tales contextos, los derechos humanos deben ser respetados y garantizados plenamente.

En otras palabras, el respeto por las garantías judiciales es fundamental para toda persona detenida, pues de no asegurarse ese respeto, se estaría afectando el núcleo esencial de los derechos, socavando así la dignidad humana, que es el pilar de una sociedad democrática.

Informes de la CIDH desde 2001 en adelante han manifestado que los detenidos en Guantánamo fueron privados del acceso a la justicia y a recursos efectivos que permitan alegar su inocencia frente a los hechos conculcados ante los tribunales. Por lo tanto, Estados Unidos, en virtud de su obligación jurídica de garantizar el derecho a la protección judicial en el ámbito internacional, debía ofrecer a los detenidos la oportunidad de acceder al sistema jurídico. Esto permitiría, en su caso, que se dictara una sentencia justa, ya sea de condena o absolución, de conformidad con la ley.

Uno de los primeros casos sometidos a juicio se realizó en 2002 por la interposición de un habeas corpus ante la Corte de Distrito de D.C, del cual se obtuvo a saber:

El 28 de junio de 2004, la Corte Suprema de Justicia, en el caso *Rasul v. Bush*, revocó dicha decisión, estableciendo que las cortes federales de Estados Unidos tienen jurisdicción para conocer recursos de hábeas corpus presentados por detenidos de Guantánamo. Transcurridos casi dos años y medio desde la apertura de las instalaciones, los detenidos de Guantánamo tuvieron, por vez primera, acceso a recursos judiciales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.77).

Pese a fijarse un precedente importante en lo que refiere a asuntos de habeas corpus, el mismo no tuvo incidencia en lo que en adelante se trataría frente a este tipo de actuaciones; a partir del 2005 se expidió la Ley de Tratamiento a Detenidos por parte del Congreso de Estados Unidos que negó de manera tácita la presentación de habeas corpus por los detenidos en la sede de Guantánamo, generando, nuevamente, una amenaza no solo a las garantías judiciales, sino también a la libertad personal, que es el fin último de este privilegio.

Sin embargo, a partir de 2008, con los casos *Boumediene v. Bush* y *Al-Adahi v. Obama*, se generó un cambio importante en torno a la regulación de los trámites presentados por los detenidos; como resultado, se resolvió el derecho a presentar habeas corpus ante cortes federales, cuestionando la importancia e incidencia en el derecho de libertad personal y objetando la privación que realizaba en su momento el poder ejecutivo; ello generó un avance importante en materia de legalidad en torno a la detención y a la presentación de recursos, como el habeas corpus, en sujetos detenidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) emitió al respecto:

Desde *Boumediene*, las cortes federales han conocido más de cien recursos de hábeas corpus presentados por detenidos de Guantánamo, procedimientos que abarcan distintas categorías de recursos. La mayoría de dichos recursos tratan el tema de la legalidad de la detención. Entre octubre de 2008 y julio de 2010, la Corte de Distrito de D.C. conoció 38 recursos de hábeas corpus presentados por detenidos de Guantánamo, y concluyó que el gobierno había incumplido su deber de establecer que los detenidos estaban involucrados con Al-Qaeda o los talibanes (p. 79).

Otro de los aspectos que se desarrollan en torno al derecho al debido proceso es lo atinente a la jurisdicción que conocerá los asuntos de los detenidos; ello implica que se tramiten ante un tribunal competente,

independiente e imparcial. En particular, en la sede de Guantánamo se llevaron a cabo numerosos trámites ante la comisión militar, lo que resultó en arbitrariedades en el proceso de juzgamiento de los prisioneros. Esto se debe a que dicha comisión, al ser un órgano jurídico que opera con cierta discrecionalidad, evaluara las pretensiones de manera arbitraria.

Varios asuntos fueron llevados bajo esta modalidad, entre ellos el de Salim Ahmed Hamdan, que tras la presentación de un habeas corpus cuestionó la constitucionalidad de estas comisiones militares; ello llevó a que con posterioridad se dieran pronunciamientos frente a estos juzgamientos que terminan dando la razón al detenido.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la protección judicial, uno de sus pilares esenciales es el derecho a una defensa adecuada. Esto implica, en primer lugar, el acceso a un abogado que se encargue por la salvaguarda de los derechos vulnerados y, además, la garantía de la privacidad como parte fundamental de una defensa técnica efectiva.

En el caso de Guantánamo, los detenidos eran obligados a utilizar abogados designados por el mismo gobierno. Si deseaban contratar abogados civiles, debía cumplir con requisitos específicos. Esta situación vulnera la confidencialidad y comunicación entre el detenido y su abogado, así como la posibilidad de contar con una defensa técnica adecuada.

Dicha relación está sometida a múltiples retos, no solo en cuestión de la información que se maneja durante la estrategia de litigio, sino además lo que enmarca temas de organización, logística y manejo en los procesos; así se evidenció por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015):

Según se informa, a los abogados defensores militares no se les permite hablar con sus clientes por teléfono; de forma tal que necesitan viajar a la Bahía de Guantánamo personalmente para hablar con ellos. Esto, a su vez, requiere una enorme inversión de tiempo; los vuelos a la base naval por lo general son semanales, sea de lunes a viernes o de martes a jueves. Por tanto, consultar con el cliente sobre cualquier asunto normalmente consume de dos a cinco días de trabajo de los abogados defensores militares (p. 105).

El caso de Guantánamo ilustra una grave vulneración del derecho a la protección judicial y otros derechos fundamentales. A pesar de los esfuerzos legales para proporcionar recursos judiciales a los detenidos,

las restricciones impuestas por legislaciones como la DTA y la MCA han limitado severamente el acceso a la justicia. Las comisiones militares han demostrado ser un mecanismo arbitrario que socava las garantías procesales, y las barreras en la comunicación entre detenidos y abogados han comprometido aún más el derecho a una defensa adecuada.

El respeto por los derechos fundamentales y las garantías judiciales es esencial para la integridad de cualquier sistema legal y para la dignidad humana. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacan la necesidad urgente de reformas que aseguren la protección efectiva de estos derechos, incluso en contextos de conflicto. Solo a través de un compromiso genuino con estos principios se podrá restaurar la confianza en el sistema de justicia y garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias.

2.1.4. Régimen de discriminación

Como resultado del atentado del 11 de septiembre de 2011, se ha generado un régimen de discriminación frente a los extranjeros que residen en la sede de Guantánamo, pues se ha cuestionado que integrantes de Arabia Saudita son personas enemigas de Estados Unidos y generadores de guerra y se les ha otorgado tratos diferenciales y normativa particular.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) ha señalado que el sistema de justicia en Guantánamo, diseñado específicamente para extranjeros, en su mayoría musulmanes, representa una violación de la cláusula de no discriminación de la Declaración Americana. Este régimen particular y severo no solo establece un sistema de justicia extremadamente restrictivo, sino que también refleja un discurso de guerra que diferencia y deshumaniza a los detenidos en función de su origen y religión.

El sistema estadounidense ha, por tanto, creado una estructura que no solo trata a los detenidos de manera desigual, sino que también ha facilitado la vulneración sistemática de sus derechos. Los detenidos en Guantánamo han enfrentado numerosas violaciones de derechos, incluida la omisión de procedimientos legales adecuados y garantías fundamentales, lo que contraviene los principios de igualdad y justicia.

La crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la necesidad urgente de reformas para garantizar que todos los

detenidos reciban un trato justo y equitativo, sin discriminación basada en su origen o religión. Es fundamental que se reviertan las prácticas que han llevado a la implementación de un régimen de detención y justicia que no respeta los derechos humanos universales. Solo así se podrá asegurar que el sistema legal respete y proteja la dignidad y los derechos de todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o religión.

3. MECANISMOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA ACCEDER ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES PARA EFECTIVIZAR LA GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS

3.1. Sistema interamericano de derechos humanos

En el sistema interamericano de derechos humanos, se encuentran tres instrumentos normativos fundamentales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que proporciona un amplio catálogo de garantías y derechos humanos; la Carta de la OEA, que es el tratado fundacional y de creación del sistema; y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que establece los principios iniciales en materia de derechos humanos.

Además de estos documentos, el sistema interamericano está compuesto por dos órganos clave: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos órganos son responsables de supervisar el cumplimiento de los derechos establecidos en los instrumentos mencionados y de promover y proteger los derechos humanos en los Estados miembros.

Por su parte, la Comisión examina las peticiones en las cuales se alegan violaciones a la Convención Americana, para los Estados que la han ratificado. En tales casos, conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022), emitirá las siguientes recomendaciones: “Suspender los actos violatorios de los derechos humanos; investigar y sancionar a las personas que resulten responsables; reparar los daños ocasionados; introducir cambios al ordenamiento legal y/o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales” (p.8).

Desde sus inicios, en la sede de Guantánamo, la CIDH fue la primera instancia internacional en instar a tomar medidas urgentes para respetar los derechos fundamentales de los detenidos y el primer órgano cuasi-

jurisdiccional en pedir el cierre de Guantánamo. La Comisión ha utilizado todas sus herramientas y mecanismos con el fin de proteger los derechos de los detenidos en Guantánamo, incluyendo medidas cautelares que protegen los derechos de todos los detenidos en Guantánamo, sistema de petición individual, audiencias públicas, solicitudes de anuencia para visitar el centro de detención, resoluciones y comunicados de prensa.

3.2. Medidas e instrumentos internacionales empleados en el centro penitenciario en Guantánamo

3.2.1. Resoluciones

El análisis del marco normativo revela una serie de graves violaciones de derechos de los detenidos en la base de Guantánamo, documentadas por diversos instrumentos internacionales. Documentos clave como las resoluciones 2/11 y 2/06 reflejan claramente las violaciones relacionadas con el derecho a la libertad, la seguridad jurídica y las garantías judiciales.

Por su parte, en la Resolución 2/11, la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares a favor de 254 detenidos por Estados Unidos en ese momento en su base naval de la Bahía de Guantánamo. La Comisión otorgó la medida, solicitando a Estados Unidos adoptar las medidas urgentes necesarias con el fin de que un Tribunal Competente defina el status legal de los detenidos.

Posterior a ello, se amplió el objeto de las medidas cautelares con el fin de que se investiguen de manera clara, completa e imparcial y además se castigue y juzgue todos los actos de tortura y otros tratos inhumanos de los que han sido víctimas los detenidos; lo anterior en virtud del principio *non refoulement* establecido en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Medida que no se cumplió y llevó a la Comisión a señalar un daño irreparable para los derechos fundamentales de los detenidos en la Bahía de Guantánamo por parte de Estados Unidos; instando a este último a cerrar el centro de detención y transferir a los detenidos mediante un proceso que respetara las obligaciones que marca el derecho internacional.

La Resolución 2/06 reiteró la preocupación por las detenciones injustificadas y la falta de cumplimiento por parte de Estados Unidos con las medidas cautelares solicitadas. Este patrón continuo de desobediencia destaca una sistemática falta de voluntad por parte del gobierno

estadounidense para adherirse a las normas internacionales de derechos humanos y garantizar las debidas garantías judiciales.

En resumen, el incumplimiento de las medidas cautelares y la persistente violación de los derechos humanos en Guantánamo reflejan una crisis en la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la "guerra contra el terrorismo". La evidencia acumulada por la CIDH señala una necesidad urgente de reformas y acciones correctivas para garantizar que los derechos de todos los detenidos sean respetados y protegidos conforme a las normas internacionales.

3.2.2. Peticiones ante la CIDH

Paralelamente, se han presentado peticiones ante el sistema interamericano con el objetivo de proteger las garantías humanas en el centro de detención de Guantánamo. Sin embargo, estas iniciativas aún resultan insuficientes debido al limitado compromiso de Estados Unidos frente a las amenazas y violaciones señaladas.

En el Informe de Admisibilidad 17/12, Petición 900/08, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Estas acciones fueron interpuestas contra los Estados Unidos en nombre de Djamel Ameziane, un ciudadano argelino que actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención de la Bahía de Guantánamo.

El peticionario sostuvo que fue capturado por militares estadounidenses en Pakistán en 2002; estuvo detenido en la base aérea de Kandahar, Afganistán, más de un mes y luego fue transferido al centro de detención de la Bahía de Guantánamo, donde permanece privado de su libertad hasta la fecha. Alega que durante su detención el Sr. Ameziane ha sido objeto de diversos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación deliberada de atención médica, abusos a sus creencias y prácticas religiosas, obstáculos desmedidos al contacto con su familia y falta de determinación de la legalidad de su detención por parte de un tribunal competente, lo que convertiría su detención, aún vigente, en arbitraria. Aunado a ello, denunció que, corre el riesgo de ser repatriado a Argelia, donde estaría en peligro de sufrir graves daños.

En consecuencia, las peticiones presentadas ante el sistema interamericano buscan proteger los derechos humanos de los detenidos en el centro de detención de Guantánamo, pero estas iniciativas aún son insuficientes debido al limitado compromiso de Estados Unidos para abordar las violaciones y amenazas señaladas. En particular, el caso de Ameziane ilustra serias preocupaciones sobre la legalidad y humanidad del tratamiento de los detenidos en Guantánamo. Aunque se han tomado medidas a nivel internacional para proteger los derechos de los detenidos en Guantánamo, el compromiso de Estados Unidos con estos estándares sigue siendo insuficiente. Las peticiones ante el sistema interamericano subrayan la necesidad urgente de abordar las violaciones de derechos humanos y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los detenidos.

3.2.3. Medidas cautelares

La CIDH ha tramitado numerosas medidas cautelares que dan cuenta de la situación de amenaza de derechos humanos que enfrentan los detenidos en la Base de Guantánamo.

En la Medida Cautelar 422/14-07 de julio de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Mustafa Adam Al-Hawsawi, proveniente de Arabia Saudita, toda vez que fue presuntamente privado de su libertad por 12 años y desde 2006 habría sido detenido en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Aunado a ello, habría sufrido amenazas y actos de violencia que atentan contra su vida, salud e integridad personal como víctima del programa de rendición, detención e interrogación de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA); detención que se habría realizado por las autoridades estadounidenses en Pakistán por su presunta implicación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense.

De manera similar, en la Medida cautelar 8/06 emitida el 21 de marzo de 2006, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Omar Khadr, un ciudadano canadiense de 19 años de edad que estaba siendo procesado por una comisión militar en Guantánamo por un presunto crimen cometido en Afganistán. Durante su detención e interrogatorio por parte del personal militar se le habría negado atención médica, habría permanecido esposado de pies y manos durante periodos prolongados

y habría sido mantenido en una celda con perros hostiles. Además, se le habrían hecho amenazas de violencia sexual y su cabeza habría sido cubierta con una bolsa de plástico.

Si bien es cierto, las medidas cautelares solicitadas por la CIDH buscan proteger a los individuos de mayores abusos y garantizar que se respeten sus derechos mientras se investigan las alegaciones de violaciones. Estos ejemplos subrayan la necesidad de una supervisión internacional rigurosa y continua para garantizar el respeto de los derechos humanos en contextos de detención prolongada y en situaciones de conflicto.

Ambos casos reflejan una preocupación generalizada por las condiciones de detención en Guantánamo y la posible violación de derechos humanos fundamentales. La CIDH ha intervenido en estos casos debido a las graves acusaciones de maltrato y violaciones de derechos, que incluyen tortura, condiciones inhumanas y violencia física y psicológica, pero sin resultados satisfactorios.

CONCLUSIONES

La situación en el centro penitenciario de Guantánamo, Cuba, ha sido objeto de considerable preocupación y debate en el ámbito de los derechos humanos y del derecho internacional. La doctrina e información recopilada acerca de la eficacia de los mecanismos internacionales en relación con las violaciones de derechos humanos en Guantánamo ha permitido resumir varios puntos clave: (i) Si bien Estados Unidos es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) la aplicación de los mismos en Guantánamo ha sido controvertida; (ii) existen mecanismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa la implementación del PIDCP, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede examinar casos de violaciones de derechos humanos en el continente americano sin embargo su actuación no ha sido activa frente a amenazas de derechos humanos en el centro penitenciario; (iii) Diversos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU y el Relator Especial sobre la Tortura, han emitido informes y recomendaciones sobre las condiciones en Guantánamo. Estas recomendaciones suelen incluir demandas para cerrar el centro

de detención y mejorar las condiciones de los detenidos, pero que han quedado aún pendientes sin aplicación en el marco de vulneración de derechos humanos; (iv) La presión de organismos internacionales y de derechos humanos ha llevado a algunos cambios, como la reducción del número de detenidos y mejoras en las condiciones. Sin embargo, la eficacia total ha sido limitada, ya que EE. UU. mantiene su soberanía sobre la base naval y sus decisiones respecto a Guantánamo; (v) algunos detenidos han llevado sus casos a tribunales internacionales o han recibido decisiones favorables en tribunales estadounidenses, pero estas soluciones han sido parciales y han enfrentado obstáculos legales y políticos; (vi) la soberanía nacional y la seguridad nacional son a menudo citadas como razones para mantener las políticas actuales.

Lo cierto es que las discusiones sobre el cierre de Guantánamo y la reforma de sus prácticas continúan y los mecanismos internacionales continúan desempeñando un papel crucial en la presión para asegurar el respeto a los derechos humanos. Para ello, la implementación efectiva de las recomendaciones internacionales dependerá de factores políticos y jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional.

Si bien es cierto que instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han realizado esfuerzos significativos para supervisar las libertades mínimas de los detenidos en el centro de Guantánamo, incluyendo peticiones como la 900/08 y medidas cautelares como la 422/14- Mustafa Adam Al-Hawsawi y la medida cautelar 8/06-Omar Khadr, también lo es que, no han resultado eficientes y contundentes para detener o mitigar las violaciones a los derechos humanos.

Recursos como el habeas corpus han perdido eficacia en asuntos que involucran a detenidos en el centro penitenciario de Guantánamo. A pesar de su validez teórica, en la práctica estos recursos a menudo quedan desplazados o incluso inaplicados, lo que resulta en una prolongación indefinida de la detención de los sujetos procesados.

En este sentido, resulta decir que los estándares de protección de derechos humanos descritos en el sistema americano han rebajado drásticamente en niveles de eficiencia para dar lugar a un centro penitenciario que incumple las garantías y derechos que son fundamentales en el marco normativo de un Estado.

Queda claro que la Base Naval en la Bahía de Guantánamo (Cuba) se ha convertido en un escenario donde los detenidos, desde su inicio, han sufrido de amenazas a su libertad, a un juicio justo, a una detención e investigación bajo parámetros legales, a un trato en condiciones humanas y de dignidad; desestimaciones que se hicieron bajo el pretexto de una salvaguarda a la diplomacia y seguridad del Estado norteamericano, misma que bajo ningún supuesto puede ser una justificación para la vulneración del sistema de derechos humanos, incluso el Derecho Internacional Humanitario.

El panorama de derechos humanos y de defensa en Guantánamo, es extremadamente precario, y la única solución viable es el cierre definitivo del Centro. El marco normativo y los operadores judiciales están subordinados a la voluntad y la observancia de Estados Unidos, que ha demostrado, a lo largo del tiempo, un incumplimiento de sus obligaciones ante instancias internacionales en materia de derechos humanos. Este incumplimiento se ha considerado como un daño irreparable a los derechos humanos de los detenidos en Guantánamo.

Además, el cierre está justificado por la alta inversión y los gastos necesarios para su funcionamiento, recursos que no se reflejan en las condiciones ofrecidas a los detenidos. Según el Departamento de Defensa (DoD), el costo de operación de Guantánamo asciende aproximadamente a US\$454 millones, una suma extremadamente alta en comparación con las condiciones físicas y los derechos garantizados a los detenidos.

En definitiva, la medida más efectiva para reducir la amenaza a los derechos humanos en el centro penitenciario en Guantánamo, dado que las instancias internacionales carecen de la obligatoriedad y fuerza necesaria al momento de actuar, es el cierre definitivo del centro. Este debe realizarse con la premisa de que, aunque los presuntos delitos deben ser juzgados, estos juicios deben llevarse a cabo bajo el marco normativo legal existente y con las garantías mínimas justas que requiere todo proceso judicial.

Caso contrario, de continuar el funcionamiento del centro penitenciario, se deben adoptar reformas tanto en el sistema internacional de derechos humanos como en las prácticas de detención de Estados Unidos. Las graves violaciones documentadas y la falta de cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH resaltan una brecha significativa en

la protección de derechos humanos en contextos de seguridad nacional y conflictos prolongados. La comunidad internacional, en conjunto con los órganos del SIDH, debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que los derechos de los detenidos sean respetados y que se implementen medidas correctivas efectivas.

REFERENCIAS

- Blandón Lotero, L. C., y Molina, J. (2015). El centro penitenciario de Guantánamo: algunas reflexiones sobre la justificación ética a la enajenación de los Derechos Humanos. *Ciudad Paz-ando*, 7(2), 158-172. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.cpaz.2014.2.a09>
- Boeglin, N. (2022). La devolución de la base de Guantánamo: primeras consideraciones de la CELAC. *SciencesPo*. <https://www.sciencespo.fr/opalc/content/la-devolucion-de-la-base-de-guantanamo-primeras-consideraciones-de-la-celac.html>
- Castillo Daudi, M. (2014). Los campos de detención de la base naval de Guantánamo: Aspectos del derecho internacional humanitario. *Revista Española de Derecho Internacional*, 66(1), 159-179. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4673023>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2006). Resolución No. 2/06 Sobre las medidas cautelares sobre los detenidos en Guantánamo. <http://www.cidh.oas.org/resoluciones/reso.2.06.sp.htm#:~:text=EXHORTAR%20a%20Estados%20Unidos%20a%20cumplir%20su%20obligaci%C3%B3n%20de%20investigar,centro%20de%20detenci%C3%B3n%20sea%20cerrado>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2011). CIDH insta a Estados Unidos a cerrar la cárcel de Guantánamo. <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/086.asp>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2011). Resolución No.2/11 sobre la situación de los detenidos de la Bahía de Guantánamo, Estados Unidos Medidas Cautelares 259-02. <https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Resoluci%C3%B3n%202-11%20Guant%C3%A1namo.pdf>

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Hacia el cierre de Guantánamo. <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/guantanamo/guantanamo.html>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Decisiones sobre el Centro de Detención de EEUU en Guantánamo. <https://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/Guantanamo.asp>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Folleto Informativo Sistema de Peticiones y Casos. http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2019). ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/16/>
- Madrid, J. (2020). La situación jurídica de los prisioneros en Guantánamo y el excepcionalísimo norteamericano. *Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas*, 10(2), 25-41. <http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2020-v10n2a02>
- Sampedro, C. (2005). Caso Guantánamo. *OASIS*, (11), 321-331. <https://vlex.com.co/vid/caso-guantanamo-845249821>